

LEY DE PROTECCION Y ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS

Ley Núm. 77 del 9 de Julio de 1986, según enmendada.

Art. 1 Declaración de política pública. (25 L.P.R.A. sec. 972)

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proveer protección y asistencia a las víctimas y testigos en los procesos judiciales que se ventilen en los tribunales así como durante las investigaciones que se realicen para promover su cooperación y participación plena y libre de intimidación en esos procesos.

En el caso de menores víctimas y testigos de delito o falta se procurará que siempre se sientan apoyados y protegidos durante las diferentes etapas de los procesos judiciales. Dado que en la última década el número de casos en que los menores son víctimas o testigos de delitos o faltas ha incrementado y que la investigación de éstos tiende a ser más compleja y conlleva una gran cantidad de recursos humanos, es preciso establecer la más rigurosa coordinación interagencial y la mayor flexibilidad posible para reducir cualquier daño psicológico que tales procesos puedan causarles, así como tomar medidas protectoras para evitar que se sientan intimidados durante los mismos. De esta manera no solo se promueve su participación en los procesos judiciales sino que nos aseguramos que se sientan apoyados y protegidos durante todo el proceso.

(Julio 9, 1986, Núm. 77, art. 1; Adiciona el segundo párrafo en el 1998, ley 184)

Art. 1a Definiciones. (25 L.P.R.A. sec. 972a)

Para los fines de las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley, los siguientes términos tendrán los significados que más adelante se indican:

(a) *Víctima*. Significa cualquier persona natural contra quien se haya cometido o se haya intentado cometer cualquier delito contemplado bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o bajo las leyes de los Estados Unidos de América.

(b) *Testigo*. Significa cualquier persona natural con conocimiento de la existencia, o de la inexistencia, de hechos relacionados con un crimen o delito y cuya declaración se ha de recibir o ha sido recibida en evidencia para cualquier propósito; quien haya informado cualquier delito a cualquier agente del orden público, fiscal, oficial sociopenal, guardia penal, oficial judicial, representante de alguna entidad investigativa del Estado Libre Asociado; aquel que haya recibido una citación u orden para comparecer a un procedimiento ante cualquier magistrado de Puerto Rico o de los Estados Unidos, ante la Legislatura o ante una agencia pública autorizada por ley.

(c) *Testigo potencial*. Significa cualquier persona natural con conocimiento de la existencia e inexistencia de hechos relacionados con un crimen o delito.

(d) *Familiares allegados*. Significa cualquier persona natural vinculada por lazos familiares o de otra naturaleza con la víctima, testigos y testigos potenciales de un delito, quienes podrán ser víctimas de amenazas, agresiones, ataques u otros medios de intimidación a fin de evitar la participación de tales víctimas, testigos y testigos potenciales en los procesos investigativos y judiciales.

(e) *Secretario*. Significa el Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

(f) *Procedimientos oficiales*. Significa cualquier procedimiento judicial, legislativo o administrativo.

Art. 2 Autoridad y deber del Secretario. (25 L.P.R.A. sec. 972b)

El Secretario de Justicia de Puerto Rico tendrá el deber y la autoridad para establecer las medidas necesarias para prevenir la intimidación de víctimas, testigos, testigos potenciales, familiares y allegados de éstos y para proveerles la protección y asistencia que en determinados momentos se entienda necesaria para asegurar su participación en procedimientos de investigación y judiciales. En todo caso deberá mediar el consentimiento de la persona a ser protegida.

Art. 2a Carta de Derechos de Menores, Menores Incapaces y/o con Impedimento (25 L.P.R.A. sec. 972a)

Toda víctima o testigo de delito o falta menor de dieciocho (18) años de edad y toda persona que padezca de incapacidad o retraso mental, además de los derechos enumerados en el Artículo 2 de esta Ley, tendrá los siguientes derechos:

(a) No será expuesto a experiencias que puedan tener consecuencias serias para su salud mental y emocional.

(b) Ofrecer, cuando las circunstancias así lo justifiquen, su testimonio por las vías alternas disponibles, ya fuere en corte abierta, mediante un sistema televisivo de circuito cerrado o por deposición grabada en cinta video cualquier sistema de grabación confiable.

(c) Estará acompañado en sala por personal de apoyo mientras presta su testimonio, quien podrá ser un familiar o conocido, un consejero o personal técnico del programa o profesional competente.

(d) En el curso de los procedimientos el tribunal velará por el bienestar del menor, dándole prioridad en el calendario a los procedimientos en que éstos son víctimas o testigos de delitos o faltas y evitará largas horas de testimonio sin receso. (Adicionada en el 1998, ley 184)

Art. 2b Técnicos de Asistencia a Víctimas y Testigos

Para implantar la política pública establecida en esta Ley, se crea, adscrita a la Secretaria Auxiliar de Asuntos Criminales, Menores y Familia, la División de Asistencia a Víctimas y Testigos; y adscrita al Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, División para la Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos. Además, el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos de Delito prestará sus servicios a través de los Técnicos de Asistencia a Víctimas y Testigos y otro personal de apoyo, nombrados por el Secretario de Justicia, quienes tendrán el deber de proveer los servicios de orientación y apoyo a las víctimas o testigos de delito de acuerdo a sus necesidades y a los recursos económicos disponibles. En el caso de menores víctimas o testigos de delito este personal podrá actuar como personal de apoyo y acompañarlos a través de todas las etapas del proceso judicial y de los procedimientos incidentales a éste con el propósito de proveerle apoyo emocional y velar por su bienestar.

(Julio 9, 1986, Núm. 77, art. 2; Adicionada en el 1998 ley 184)

Art. 3 División; creación. (25 L.P.R.A. sec. 972c)

(a) A fin de implantar el propósito de las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley se crea adscrita al Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia la División para la Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos, testigos potenciales y los familiares y allegados de éstos.

(b) La División [para la] Protección se creará bajo un sistema de coordinación y cooperación entre el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico a fin de que la integren agentes del orden público de la Policía de Puerto Rico y personal que ha sido nombrado por el Secretario de Justicia bajo las disposiciones del Artículo 2A de la Ley Núm. 64 del 22 de junio de 1978, o bajo la autoridad que se le confiere en este capítulo.

(c) Los miembros de la Policía de Puerto Rico designados para integrar la División [para la] Protección continuarán ostentando la autoridad, prerrogativas y poder que la ley les confiere en su capacidad de agentes del orden público. Los miembros designados por el Secretario de Justicia tendrán facultad para denunciar, arrestar, diligenciar órdenes de los tribunales y para tener, poseer, portar, transportar y conducir armas de fuego.

(d) La División [para la] Protección prestará sus servicios a toda la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante un término de 24 horas al día. El Secretario adoptará las medidas que permitan extender el servicio de protección a toda la isla.

Art. 4 Línea de emergencia; establecimiento. (25 L.P.R.A. sec. 972d)

(a) El Departamento de Justicia establecerá y mantendrá en operación 24 horas al día, una línea de emergencia al servicio de víctimas de delitos, testigos, testigos potenciales, familiares y allegados de éstos que se sientan amenazados por los delincuentes contra quienes han testificado o podrían testificar.

(b) Toda persona que cualifique para protección bajo las disposiciones de las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley deberá ser orientada sobre la utilización de la línea de emergencia.

Art. 5 Otros servicios de protección. (25 L.P.R.A. sec. 972e)

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Secretario podrá tomar otras medidas de emergencia a fin de brindar protección a las personas que cualifiquen bajo las disposiciones de las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley:

(a) Podrá adquirir por compra, arrendamiento o cualquier otra forma propiedad inmueble o mueble y establecer un albergue que brinde seguridad y protección para alojar a las víctimas, testigos, testigos potenciales y a sus familiares y allegados, por el tiempo que considere necesario.

(b) Podrá reubicar la residencia de la persona o personas protegidas fuera del área geográfica donde éstos han residido, y en casos meritorios, aun fuera de Puerto Rico.

(c) Podrá ordenar la vigilancia directa y otras medidas de seguridad en la residencia de la persona afectada, proveerle transportación y protección en su lugar de empleo, y sus familiares y allegados; y, con el consentimiento de la persona amenazada, podrá utilizar los medios electrónicos legales y constitucionales permitidos para investigar las amenazas que se hagan

contra los testigos, víctimas, familiares y sus allegados, incluyendo el rastreo de llamadas telefónicas.

(d) Podrá ordenar la asistencia económica que fuere necesaria, así como el pago de servicios esenciales que se determinen necesarios en aquellos casos en que las comparecencias del testigo, víctima, familiar o allegado a los tribunales le impidan conseguir trabajo, o que por seguridad personal no sea conveniente que el testigo, víctima, familiar o allegado se emplee.

(e) Podrá (previo el consentimiento de la persona afectada) ordenar las medidas necesarias para que en el Registro Demográfico y los demás registros públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se cambie la identidad o identificación del testigo, víctima, familiar o allegado, en aquellos casos que sea necesario para la seguridad de la persona.

(f) Podrá ordenar las medidas necesarias para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas cambie la tablilla del vehículo de motor del testigo, víctima, familiar o allegado, en aquellos casos que sea necesario para la seguridad de la persona.

(Julio 9, 1986, Núm. 77, art. 1; Agosto 21, 2009, Núm. 87, art. 1, añade el inciso (f), efectiva 90 días después de su aprobación.)

Art. 6 Autoridad para solicitar órdenes de los tribunales. (25 L.P.R.A. sec. 972f)

El Secretario podrá, en cualquier momento luego de iniciado un procedimiento oficial, acudir a los tribunales a solicitar que se emita una orden para cesar y desistir, dirigida contra cualquier persona que directa o indirectamente esté intimidando o intentando intimidar a una víctima, testigo, testigo potencial, familiares y allegados de éstos. De ser emitida, el Secretario o su representante comunicará tal orden y las consecuencias de su desobediencia al acusado o sospechoso a través de su abogado, si lo tuviere, o personalmente cuando no tuviere asistencia legal.

Art. 7 Personas cualificadas - Sistema para referirlas a la División. (25 L.P.R.A. sec. 972g)

El Secretario establecerá un sistema para el referimiento a la División [para la] Protección y Asistencia a [Víctimas y] Testigos de personas que cualifiquen para recibir servicios de protección bajo las disposiciones de las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley. Los referimientos tendrán lugar cuando se sospeche que una víctima, testigo, testigo potencial, familiares y allegados de éstos correrán el riesgo de amenaza, ataque o de otra forma de intimidación por el sospechoso, el acusado o sus familiares, amigos o asociados.

El Secretario deberá considerar como fuentes de referimiento y de información las agencias encargadas de la ley y el orden, otras agencias donde se conducen procesos administrativos y cuasi judiciales, los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos, otros funcionarios de la Rama Judicial y las Fiscalías de Distrito, la División de Investigaciones y Procesamiento Criminal y el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia.

Art. 8 Elegibilidad para protección. (25 L.P.R.A. sec. 972h)

Los beneficios de protección provistos por las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley se extenderán a toda persona víctima de delito, testigo, testigo potencial, familiar o allegado de éstos, independientemente de la naturaleza o gradación del delito, si se determina que cualquiera

de las personas mencionadas está en riesgo de sufrir amenazas, agresiones o intimidación directa o indirecta a fin de disuadirle de participar en el procedimiento oficial a seguirse o cuando se trate de influenciar su testimonio o cuando esté expuesta a cualquier aspecto de la conducta contemplada en las [33 LPRA secs. 4434, 4435 y 4435a].

La protección provista bajo las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley se podrá extender a las personas que cualifiquen aun con posterioridad a la conclusión del proceso oficial cuando las circunstancias lo justifiquen. (Vea Ley Núm. 91 del 13 de julio de 1988, para disposiciones especiales)

Art. 9 Acuerdos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (25 L.P.R.A. sec. 972i)

El Secretario de Justicia concertará con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los acuerdos que fueren necesarios para que las personas que cualifiquen para la protección de las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico puedan acogerse a los beneficios del *Organized Crime Control Act of 1970* (Public Law 91/x-452; 84 Stat. 922) y a los más amplios beneficios del *Victim and Witness Protection Act of 1982* (Public Law 97/x-291; 96 Stat. 1248).

Art. 10 Administración de la División. (25 L.P.R.A. sec. 972i-1)

El Secretario podrá nombrar un Director de la División para la Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos y delegar en dicho funcionario la responsabilidad y autoridad para administrar y poner en ejecución las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley.

La División no estará sujeta a lo dispuesto en las [3 LPRA secs. 931 et seq.], conocidas como "Ley de la Administración de Servicios Generales", ni a lo dispuesto en las [3 LPRA secs. 933a et seq.], conocidas como "Ley de Compras y Suministros".

Se faculta a la División a realizar aquellas transacciones que fueren apropiadas, razonables y necesarias para el fiel cumplimiento de los propósitos de las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley.

Se faculta así mismo al Departamento de Justicia a vender o de otro modo disponer de su propiedad mueble o inmueble o de cualquier otro interés en la misma que, a juicio del Secretario de Justicia, no le sea ya necesaria o útil para sus fines.

No obstante, bajo ninguna circunstancia podrá disponerse de la propiedad inmueble sin que exista una tasación del valor de la propiedad realizada por tasadores del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en aquellos casos en que la transacción esté cubierta por las [28 LPRA secs. 31 a 31o] .

Art. 11 Flexibilidad fiscal. (25 L.P.R.A. sec. 972i-2)

El Secretario, en coordinación con el Secretario de Hacienda, establecerá los reglamentos que sean necesarios para garantizar la flexibilidad y confidencialidad de los asuntos fiscales de la División, incluyendo la disponibilidad de los fondos que se asignen por la Asamblea Legislativa.

(Julio 9, 1986, Núm. 77; Adicionado como art. 11 en el 1987, ley 28)

Art. 12 Reglamento. (25 L.P.R.A. sec. 972j)

Sesenta (60) días después de la aprobación de esta ley, el Secretario de Justicia preparará e implantará un reglamento detallado que permita el cumplimiento de los objetivos de las [25 LPRA secs. 972 et seq.] de esta ley. Dicho reglamento también incluirá disposiciones que integren los derechos de las víctimas y testigos cubiertos por los *Federal Guidelines For Fair Treatment of Crime Victims and Witnesses in the Criminal Justice System*.

(Julio 9, 1986, Núm. 77, art. 11; Renumerado como art. 12 en el 1987, ley 28)

Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito

Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1988, según enmendada.

Art 1 Derechos de las víctimas y testigos de delito – Propósito (25 L.P.R.A. sec. 973)

En armonía con la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a las víctimas y testigos en los procesos judiciales y en las investigaciones que se realicen declarada en virtud de las [25 LPRA secs. 972 a 972j] de esta ley, se adopta la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito.

(Abril 22, 1988, Núm. 22, art. 1.)

Art. 2 Carta (25 L.P.R.A. sec. 973a)

Toda persona que sea víctima o testigo de delito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá derecho a:

(a) Recibir un trato digno y compasivo por parte de todos los funcionarios y empleados públicos que representen las agencias que integran el sistema de justicia criminal durante las etapas de investigación, procesamiento, sentencia y disposición posterior del caso criminal que se inste contra el responsable del delito.

(b) Tener acceso a servicio telefónico, libre de costo, para comunicarse con su familia o allegado más cercano o con su abogado, tan pronto entre en contacto con el sistema de justicia criminal.

(c) Exigir que se mantenga la confidencialidad de la información sobre su dirección y números telefónicos cuando así lo estime necesario para su seguridad personal y de sus familiares así como el privilegio de la comunicación habida entre la víctima y su consejero que garantiza la Regla 26-A de las de Evidencia, según enmendadas.

A estos fines, la dirección residencial y de negocio, así como los números de teléfonos de una víctima o testigo de un crimen se mantendrá confidencial. Ningún informe, papel, dibujo, fotografía, documento archivado en el tribunal o cualquier otro documento que se relacione a un crimen y que contenga dicha información y esté bajo la custodia o en posesión de cualquier funcionario o empleado público, incluyendo el fiscal, la policía o empleados del tribunal, estará disponible para inspección pública, a menos que la información de la dirección y teléfono de la

víctima y testigos haya sido omitida. Ningún funcionario o empleado público divulgará la información sobre la dirección y teléfonos de la víctima o testigo excepto a:

(1) Los funcionarios y empleados públicos que como parte del desempeño de sus funciones requieran dicha información, incluyendo la policía, fiscales, oficiales probatorios o funcionarios y empleados de prisiones y tribunales encargados de investigar, en juiciar o mantener expedientes relacionados con el crimen o el acusado o que tengan otros deberes legales impuestos por el cargo que desempeñan;

(2) una agencia gubernamental o entidad que provea compensación o servicios a víctimas y testigos o que investiga o adjudica reclamaciones por tales compensaciones o servicios;

(3) una organización o grupo que tiene como propósito proveer asesoramiento, servicios o cualquier otra ayuda a las víctimas del crimen y que necesita la dirección y números telefónicos de las víctimas para ofrecerles estos servicios, de conformidad con las disposiciones de este capítulo. Esta información no estará disponible a entidades que solicitan la información para propósitos comerciales;

(4) una persona o agencia que tenga el consentimiento escrito de la víctima o testigo o de los padres, esposo u otra persona legalmente responsable por el cuidado de la víctima o testigo, con la excepción de que se disponga en contrario por orden del tribunal;

(5) una persona, quien antes o después del juicio del caso relacionado con la víctima o el testigo, lo solicita al tribunal con jurisdicción en el caso y el tribunal ordena que se le dé la información. El tribunal dictará la orden sólo después que:

(A) La persona que lo solicita demuestra la satisfacción del tribunal que existe una buena causa para que se le divulgue la información;

(B) el tribunal ha recibido información suficiente de parte del fiscal que le asegure que la víctima o testigo no está en riesgo de daño personal alguno como resultado de la divulgación o está adecuadamente protegido de tal riesgo; y

(C) se le ha notificado por escrito sobre dicha orden a la víctima o testigo, sus padres, esposo u otra persona legalmente responsable por el cuidado de la víctima o testigo y al fiscal, por lo menos ciento veinte (120) horas antes de firmar dicha orden.

Durante el juicio o una vista relacionada con un procedimiento criminal, el tribunal ordenará que la dirección residencial y de negocio, así como los teléfonos de una víctima o testigo del crimen no se divulguen en corte abierta y que no se le exija a la víctima o testigo informar, a preguntas de la defensa o el fiscal, la dirección o teléfono, a menos que el tribunal determine que existe una clara necesidad para tal divulgación porque la información es necesaria y relevante a los hechos del caso o para determinar la credibilidad del testigo. El peso de probar la necesidad y relevancia de la divulgación lo tendrá la defensa o la parte que solicite la información. Antes de emitir una orden autorizando la divulgación, el tribunal se asegurará razonablemente, que la víctima o testigo no está en riesgo de daño personal alguno como resultado de la divulgación o que está adecuadamente protegido de tal riesgo.

Nada de lo contenido en esta disposición se interpretará como que el tribunal excluye al público de etapa alguna del procedimiento o interfiere con el derecho del acusado a descubrir

prueba o que se limita el acceso del público a información gubernamental o el derecho de la prensa a publicar información legalmente obtenida.

El fiscal o la persona que éste autorice en el distrito en el cual una organización privada de servicios a víctimas y testigos solicite información de la dirección y teléfonos de la víctima o testigos, podrá autorizar la divulgación de la información a la organización por la fiscalía, policía u otros funcionarios o empleados públicos si concluye que:

(1) El propósito primario de buena fe de la organización es proveer servicios, asesoramiento u otra ayuda a las víctimas del crimen;

(2) los servicios ofrecidos le serán de beneficio a las víctimas o testigos; y

(3) la organización no solicita la información con propósitos comerciales. Ninguna agencia comercial o con fines de lucro será considerada que opera con el propósito primario y de buena fe de proveer asesoramiento o ayuda a las víctimas del crimen.

Una organización a la que se le niega la información puede solicitar una revisión de la decisión por el Secretario de Justicia, quien podrá ordenar que se divulgue la información de conformidad con los criterios antes expresados. Tanto la organización como sus empleados o voluntarios que trabajen para ella, mantendrán la información confidencial.

Será ilegal divulgar, solicitar, recibir, hacer uso de o autorizar o a sabiendas, permitir el uso o la divulgación de información que contenga la dirección residencial o números de teléfonos de víctimas o testigos sin el consentimiento escrito de éstos, excepto para propósitos directamente relacionados con la provisión de servicios a la víctimas o testigos o con la administración de los programas o servicios de la organización.

Toda persona que viole las disposiciones de este inciso será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión establecida o pena de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas.

(d) Recibir todos los servicios de protección que garantizan las [25 LPRA secs. 972 a 972j] de esta ley, para sí y para sus familiares contra las posibles amenazas y daño que puedan sufrir por parte del responsable del delito, sus secuaces, amigos y familiares incluyendo, sin que se entienda como una limitación, la línea telefónica de emergencia, albergue, cambio de dirección e identidad y vigilancia directa.

(e) Ser orientado sobre todos aquellos programas de asistencia médica, psicológica, social y económica que estén disponibles en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a recibir la información correcta por parte de los funcionarios y empleados de las agencias públicas y privadas que administran estos programas y a que se les oriente sobre su procedimiento para tramitar la solicitud de estos servicios.

(f) Recibir para sí y para sus familiares todos aquellos servicios y beneficios que provean los programas de asistencia médica, psicológica, social y económica que estén disponibles en el Estado Libre Asociado y para los cuales sea elegible.

(g) Ser notificado por escrito del desarrollo de todas las etapas del proceso de investigación, procesamiento y sentencia del responsable del delito por lo cual deberá:

1. ser consultado antes de que se proceda a transigir una denuncia o acusación contra el autor del delito;

2. ser informado de los procedimientos posteriores a la sentencia cuando así se le solicite a la Policía de Puerto Rico, al Negociado de Investigaciones Especiales o al Ministerio Fiscal;

3. ser informado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, según corresponda, en los casos en que el responsable del delito sea liberado por haber extinguido su sentencia, sea puesto en libertad a prueba (probatoria), en libertad bajo palabra, en libertad bajo supervisión electrónica, en libertad por una condición de salud, si es trasferido a una nueva institución correccional, si se encuentra en un hogar de Adaptación Social. La referida notificación se ha de realizar en un término no menor de treinta (30) días previo a la excarcelación;

4. ser informado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación si el reo se evadiera de una institución carcelaria, hospitalaria o de un hogar de Adaptación Social, en o antes de las veinticuatro (24) horas contadas a partir del momento en que la Administración de Corrección advenga en conocimiento del hecho;

5. ser informado por el Departamento de Corrección de la captura del reo evadido, en o antes de las veinticuatro (24) horas contadas desde el momento en que ocurra la aprehensión; y

6. ser informado por el Departamento de Corrección o la Junta de Libertad Bajo Palabra, según corresponda, del fallecimiento del convicto, dentro de un término no mayor de quince (15) días a partir del deceso.

La Policía de Puerto Rico, el Ministerio Público y la Junta de Libertad Bajo Palabra, según aplique, serán responsables de suministrar toda la información necesaria al Departamento de Corrección para que éste pueda cumplir con las disposiciones de esta Ley y así estar en posición de notificar a las víctimas y testigos de delito.

(h) Lograr que el Ministerio Fiscal promueva la rápida ventilación de los casos criminales contra el responsable del delito y en especial, los casos de delitos sexuales, maltrato y violencia doméstica.

(i) Estar presente en todas las etapas del procesamiento contra el responsable del delito cuando lo permitan las leyes y reglas procesales, excepto en aquellos casos en que lo prohíba el tribunal por razón de que la víctima sea testigo en el proceso criminal o por otras circunstancias y a que la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales o el Ministerio Fiscal le informen prontamente cuando su presencia no sea necesaria en el tribunal.

(j) Recibir en todo momento en que esté prestando testimonio en un tribunal o en un organismo cuasi judicial un trato respetuoso y decoroso por parte de abogados, fiscales, jueces y demás funcionarios y empleados concernidos y la protección del juez o del funcionario que preside la vista administrativa en casos de hostigamiento, insultos, ataques y abusos a la dignidad y a la honra del testigo o de sus familiares y allegados.

(k) Cuando se trate de una víctima de violación, a no ser preguntada sobre su historial sexual sujeto a lo dispuesto en la Regla 21 de Evidencia para el Tribunal General de Justicia de 1979, [32 LPRA Ap. IV].

(l) Cuando sea menor de edad o incapacitado, a no ser preguntado sobre el alcance del deber de decir la verdad, a que no se le tome juramento o afirmación en este sentido, y a instar las acciones por delitos sexuales y maltrato dentro del término prescriptivo extendido que provea la [23 LPRA sec. 3412].

(m) Tener a su disposición un área en el tribunal donde se esté ventilando el proceso judicial contra el responsable del delito que esté separada del acusado, sus secuaces y amigos y familiares y, cuando no esté disponible esta área separada, recibir otras medidas protectoras.

(n) Lograr que se le releve de la comparecencia personal en la vista de determinación de causa probable para el arresto, cuando su testimonio conlleve un riesgo a su seguridad personal o de su familia o cuando se vea física o emocionalmente imposibilitada.

(o) Someter al tribunal sentenciador un informe sobre el efecto económico y emocional que le ha ocasionado la comisión del delito según lo garantizan las Reglas 162.1 y 162.2 de Procedimiento Criminal, [34 LPRA Ap. II].

(p) Recibir la compensación económica que le corresponde por razón de su comparecencia en el proceso judicial así como la concesión de licencia judicial y reinstalación en el empleo que proveen la [34 LPRA sec. 752], las [29 LPRA secs. 193 a 193c], las [3 LPRA secs. 1301 a 1431], y la [33 LPRA sec. 4445].

(q) Recibir el beneficio de la restitución por parte del responsable del delito en todos aquellos casos en que las [33 LPRA secs. 3001 et seq.] o las leyes especiales así lo provean.

(r) Recibir devueltos todos aquellos bienes de su propiedad que se hayan retenido por las autoridades concernidas con el propósito de ser utilizados como evidencia tan pronto como sea posible.

(s) ser informada del nombre, edad y municipio en que reside el ofensor que haya cometido el delito en su contra, o falta, aún cuando éste sea menor de edad, según sea el caso. En todos los casos de agresión sexual la víctima tendrá acceso a toda información, incluyendo nombre, edad y dirección del ofensor.

(Julio 13, 1988, Núm. 91, art. 2; enmendada en el 1998, Núm. 307; 2000, Núm. 161; Febrero 18, 2011, Núm. 14, art. 1, enmienda el inciso (g) y añade el inciso (s).)

Nota Importante

Enmienda

-2011, ley 14 – Esta ley 14 enmienda este artículo e incluye los siguientes artículos relacionados:

Artículo 3.-Cláusula de Separabilidad -Si cualquier palabra, oración, cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la palabra, oración, cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Artículo 4.-Vigencia -Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Art. 3 Acción para reclamarlos. (25 L.P.R.A. sec. 973b)

Toda persona que ostente un derecho de los reconocidos por las [25 LPRA secs. 973 a 973c] de esta ley podrá por sí, por su tutor o por medio de un funcionario público o persona particular interesada en su bienestar acudir al Departamento de Justicia o a cualquier otro foro administrativo o sala del Tribunal de Primera Instancia del distrito judicial donde resida para reclamar cualquier derecho o beneficio que le corresponda o para solicitar que se suspenda una actuación en violación a las disposiciones de las mismas.

El Departamento de Justicia o el foro administrativo competente al cual acuda la persona recibirá e investigará estas querellas y tramitará las acciones judiciales que procedan.

En caso de que la querella impute a un funcionario público o persona privada la violación de los derechos reconocidos por las [25 LPRA secs. 973 a 973c] de esta ley, el Departamento podrá acudir ante los foros y autoridades competentes para que se tomen las medidas administrativas y acciones que correspondan.

Las querellas que se radiquen por alguna violación a los derechos reconocidos por las [25 LPRA secs. 973 a 973c] de esta ley contra jueces o abogados se tramitarán ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Para los fines de esta sección el término funcionario público incluye a los miembros de la Policía de Puerto Rico y a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, a los agentes del orden público, los fiscales nombrados por el Gobernador de Puerto Rico o designados por el Secretario de Justicia, los Procuradores para Asuntos de Menores y cualquier otro funcionario o empleado público.

Los tribunales concederán prioridad a las acciones iniciadas en virtud de las [25 LPRA secs. 973 a 973c] de esta ley y tendrán facultad para nombrar a la víctima o testigo de delito o sus familiares, representación legal o un defensor judicial cuando éstos no cuenten con recursos económicos. El tribunal tendrá facultad para dictar cualquier orden o sentencia conforme a derecho y que sea necesaria para llevar a cabo las disposiciones de las [25 LPRA secs. 973 a 973c] de esta ley. El incumplimiento de las órdenes y sentencias dictadas por el tribunal en virtud de esta sección constituirá desacato civil.

(Julio 13, 1988, Núm. 91, art. 3.)

Art. 4 Reserva de otras acciones. (25 L.P.R.A. sec. 973c)

El ejercicio de la acción autorizada por las [25 LPRA secs. 973 a 973c] de esta ley es independiente de cualesquiera otra acción civil o criminal, derecho o remedio que disponga la legislación vigente y ninguna de las referidas disposiciones limitarán o impedirán el ejercicio de tales acciones, derechos o remedios.

(Julio 13, 1988, Núm. 91, art. 4.)

Ley sobre Obligaciones de Notificación

Ley Núm. 91 del 13 de Julio de 1988

Artículo 1. Obligación de notificación.

En todo caso de víctimas de delitos contra la vida, contra la integridad corporal, violación, robo, agresión, todos ellos incluyendo el grado de tentativa, así como aquellos delitos en que de la denuncia o acusación surjan los elementos de intimidación, fuerza o violencia tanto física como mental, deberá notificarse a ésta cuando el acusado o convicto se encuentre en la libre comunidad por cualquiera de las siguientes circunstancias:

- (a) Se encuentre en libertad bajo fianza;
- (b) se le haya concedido una sentencia suspendida;
- (c) se le haya concedido libertad bajo palabra;
- (d) esté disfrutando de un permiso en la comunidad; o
- (e) se encuentra evadido de la institución donde esté recluido.

(Julio 13, 1988, Núm. 91, art. 1.)

Artículo 2. Agencia encargada de notificar.

La obligación de notificación a que se refiere el Artículo 1 de esta ley corresponde en los casos de los incisos (a) y (b) al tribunal en que haya prestado la fianza o concedido la sentencia suspendida, a la Junta de Libertad Bajo Palabra y la Administración de Corrección en los casos mencionados en el inciso (c) y a la Administración de Corrección en los casos mencionados en los incisos (d) y (e).

En los casos en que la víctima esté recibiendo los beneficios de protección bajo la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según enmendada [25 LPRA secs. 972 et seq.], conocida como "Ley para la Protección de Testigos y Víctimas", la obligación de notificación recaerá sobre la División para la Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos.

(Julio 13, 1988, Núm. 91, art. 2.)

Artículo 3. Protección a petición de víctima.

Cuando así lo solicite la víctima de alguno de los delitos mencionados en el Artículo 1 de esta ley deberá proveerse protección por la División para la Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos los casos en que el acusado se encuentra en libertad bajo fianza, o el convicto esté disfrutando de un permiso en la comunidad o si se encuentra evadido de la institución penal, mientras el recluso permanezca fuera de la institución.

Artículo 4. Vigencia.

Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación [13 de Julio de 1988].

Notas Importantes:

1- Exposición de motivos de la Ley Núm. 184 del 29 de junio de 1998 para enmendar la Ley Núm. 28 del 19 de junio de 1987.

“La Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito adoptada mediante la **Ley Núm. 22** de **22** de abril de **1988**, según enmendada, reafirma la política pública de protección y asistencia a las víctimas y testigos en las investigaciones y los procesos judiciales. Esta responsabilidad está plasmada en la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección de Testigos y Víctimas", aprobada con el propósito de armonizar los derechos del acusado frente al interés de salvaguardar el bienestar y la integridad de la víctima o mayor efectividad del sistema de justicia criminal, pues se promueve y estimula la cooperación de éstos en la investigación y procesamiento.

La responsabilidad por la ejecución de la política pública y las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 77, antes citada, se confirió al Departamento de Justicia, en atención a la función y participación directa que tiene en el proceso investigativo y en el trámite judicial. La protección y la asistencia va dirigida a toda persona natural víctima o testigo, sin distinción alguna, esto es, comprende a las personas adultas, como a los menores. Sin embargo, la Asamblea Legislativa entiende que es necesario hacer un pronunciamiento específico en el caso de los menores víctimas o testigos de delito o falta. Ello, como parte de la política pública prevaleciente de protección a los menores y en atención al incremento en el número de casos en que estos son víctimas o testigos. Esta Ley contribuirá a facilitar el proceso y, sobretodo, a crear la sensibilidad necesaria para atender estos casos y velar por el bienestar de los menores.”

2.- Exposición de motivos de la ley Núm. 307 del 23 de diciembre de 1998 que enmienda la **ley Núm. 22** de **22** de abril de **1988**.

“La **Ley Núm. 22** de **22** de abril de **1988** establece la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, la cual recoge los derechos y garantías que se han reconocido en diversas leyes y reconoce que debe existir un balance adecuado entre la protección a los acusados y la protección a las víctimas y testigos.

Esta medida ratifica y amplía el derecho de las víctimas y testigos a que no se divulgue información sobre su dirección residencial y de negocio, al igual que la de los números telefónicos, de conformidad con la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dirigida a garantizar el respeto, tanto a la dignidad de las víctimas y testigos, como a su integridad física personal.”